

Huachipato y la reconversión laboral

El Gobierno ha presentado el «Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío», dirigido a enfrentar los impactos económicos, laborales y sociales del cierre de la producción de acero de la Compañía Siderúrgica de Huachipato (CSH). El plan considera 32 medidas específicas agrupadas en cinco ejes estratégicos: apoyo a empresas proveedoras en riesgo, reinserción laboral, aceleración de la inversión pública y privada, fortalecimiento industrial, y recuperación de la producción nacional de acero.

El diseño incluye, entre otros, dos tipos de subsidios laborales, que beneficiarían a unos 4 mil 700 trabajadores; flexibilización de las obligaciones tributarias de las empresas, estímulo a la reinserción de los trabajadores, apoyo a nuevas iniciativas productivas, favorecer la integración energética, la mejoría de la red portuaria y el desarrollo de proveedores de emprendimientos eólicos, de construcción naval y en turismo. Según la autoridad, la inversión en nuevos proyectos podría alcanzar a los US\$ 6.800 millones y generaría en torno a 5 mil puestos de trabajo.

El término de la actividad de Huachipato ha destruido alrededor de 1.500 empleos directos y afecta, en distintos grados, a 20 mil ocupaciones indirectas o terceri-

“La experiencia comparada evidencia que cambios en la base industrial han acarreado variaciones políticas y culturales”.

zadas de 162 empresas; parte importante de estos últimos trabajadores están en condiciones más precarias y encaran mayores escollos para reconvertirse; por lo mismo, el plan del Ejecutivo presta especial atención a esta dimensión a través de los subsidios de retención y contratación. A juicio de representantes gremiales y políticos, el programa se orienta en una línea correcta, pero requiere de precisiones, tiempos de ejecución más detallados y garantizar su instalación.

La decisión del grupo CAP ha causado un intenso debate respecto de la eficiencia de la empresa acerera —deficitaria desde hace un largo período—, las medidas proteccionistas, sus costos en precios para otros sectores económicos y el propio Estado, y la conveniencia o no de contar con una siderurgia local competitiva que no dependa de subsidios o protec-

ciones; de hecho, uno de los objetivos de largo plazo de la estrategia del Gobierno es impulsar el acero “verde”, a partir de yacimientos de hierro de Corfo y el uso de hidrógeno.

Es altamente probable que en las próximas décadas se siga asistiendo, a nivel local y global, a grandes transformaciones de la economía, el comercio internacional y las nuevas tecnologías que tendrán un impacto fundamental en la composición del empleo tal como hoy se conoce; de allí la importancia de desarrollar políticas que minimicen los costos sociales de esa modernización e incentiven la innovación y la reconversión de los trabajadores.

La forma en que el Estado y los privados articulen la solución a la crisis laboral por el cierre de Huachipato constituye un test sobre las capacidades de las políticas públicas y de las empresas de adaptarse a escenarios inéditos. La experiencia comparada —en EE.UU., Europa occidental y la antigua órbita soviética— evidencia que cambios en la base industrial han acarreado variaciones políticas y culturales.

En este sentido, el caso de Huachipato es un laboratorio de las respuestas que habrá que considerar cuando otros sectores se vean enfrentados a procesos de transformación o desaparición de su manera de producir.